



# GACETA DE PUERTO-RICO.

AÑO 1867.

JUEVES 25 DE ABRIL

NUM. 50.

## PARTE OFICIAL.

### GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Dirección de Administración.

Oportunamente se publicaron, y además se circularon entre los suscritores los estatutos aprobados por S. M. la Reina (q. D. g.) para el "Banco Español de Puerto-Rico," cuya constitución fué autorizada por Real Decreto de 10 de Abril de 1866; y revestido el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil con las facultades extraordinarias que aquella y otra soberana resolución le concede para su instalación definitiva, se ha servido resolver, en acuerdo con esta Dirección, lo siguiente:

1.º El día 13 de Mayo próximo venidero, á las once de la mañana, se reunirán todos los suscritores bajo mi presidencia, en el Palacio de la Real Fortaleza.

2.º El objeto de esta reunion será: aceptar las modificaciones introducidas en el proyecto de Estatutos elevados al Gobierno Supremo; reformar el Reglamento especial para las operaciones del Banco, y elegir su administración, compuesta de un Director, un Subdirector, nueve Conciliarios y tres suplentes.

3.º En esta reunion que se celebrará ante Escribano Real, Notario de Indias, se extenderá la escritura social que firmarán todos los concurrentes á la Junta.

4.º Con objeto de evitar los gastos que ocasionaría á los suscritores que no puedan asistir á dicho acto, el otorgamiento de poderes especiales, podrán ser representados por los concurrentes, autorizándolos simplemente por medio de una carta en que se consignare, dando conocimiento de ello y por escrito á la Dirección de Administración local. El apoderado, por su parte, deberá presentar en dicho centro la carta que lo autorice, con cuatro dias por lo menos de anticipación al fijado para la Junta.

5.º Los Señores Corregidores y Alcaldes darán á este Decreto la mayor publicidad posible, á fin de que llegue á conocimiento de todos los suscritores, y se hará además insertar por diez veces en los periódicos de la Isla.

Y en cumplimiento de lo resuelto por S. E. se hace notorio por medio de la Gaceta oficial para los efectos que se indican. Puerto-Rico 30 de Marzo de 1867.—Carlos de Rojas.

### DIRECCION DE ADMINISTRACION LOCAL DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

Habiendo resultado vacante la Alcaldía de primer clase del pueblo de Arroyo por renuncia del Capitan de Infantería D. Alejandro Montestrucque que la servia; y correspondiendo su provision al turno de antigüedad, el Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil en acuerdo con esta Dirección ha tenido por conveniente nombrar para que la sirva en propiedad á D. Andrés Dapena Alcalde de Sabana-grande, que es el primero de los de su clase para el ascenso, toda vez que los que le preceden, quedan postergados por ahora por circunstancias especiales. Puerto-Rico Abril 22 de 1867.—Carlos de Rojas.

### MINISTERIO DE ULTRAMAR.

#### Real Decreto.

(Continuacion.)

#### CAPITULO VIII.

Condiciones generales de la minería.

Art. 53. Como comprobación de haber estado

poblada una concesion minera, señalará el reglamento la labor mínima que actualmente debe resultar hecha en ella segun sus condiciones y circunstancias. Cuando se demuestre la dificultad de beneficiar y utilizar los productos de una mina, escorial ó terrero, podrá por orden del Gobernador superior civil reducirse el pueblo á la mitad del correspondiente segun el art. 50 por el término máximo de dos años.

Art. 54. Durante la tramitacion de los expedientes, podrán los registradores adelantar las labores de minería á su voluntad; mas si se presentase oposicion, se suspenderá toda clase de trabajos, á no prestarse fianza suficiente á juicio del Gobernador superior civil, en caso de recurso en queja.

Art. 55. Todo minero accederá á facilitar la ventilacion de las minas colindantes; permitirá bajo indemnizacion, si hubiese lugar, el paso subterráneo al agua de las mismas minas con direccion al desagüe general, y consentirá por la superficie de sus pertenencias el tránsito necesario para el servicio de las ajenas. Indemnizará por convenio privado ó por tasacion de peritos con sujecion á las leyes comunes, los daños y perjuicios que ocasionare á otras minas, ya por acumulacion de aguas en sus labores, si requerido no las achicase en el plazo de reglamento, ya de otro modo cualquiera de que resultase menoscabo á intereses ajenos, dentro ó fuera de las minas, y en operaciones anteriores, simultáneas ó posteriores á la extraccion de minerales ó zafra. Si en estos casos ó en los de indemnizacion al dueño del terreno fuese legalmente declarada su insolvencia, será reputado dañador voluntario para todos los efectos legales.

Art. 56. Los mineros podrán obtener el libre y pleno disfrute del todo ó parte de la superficie de sus pertenencias para almacenes, talleres, lavaderos, oficinas de beneficio, depósitos de escombros ó escorias, caminos y otros usos análogos, todo dentro de las estrictas necesidades de su industria. Si al efecto no se concertasen particularmente con los dueños de los terrenos sobre la extension que pretendan ocupar y su precio, solicitarán del Gobernador superior civil la inmediata aplicacion de la ley de expropiacion forzosa que en estos casos procede, y tendrá efecto dentro de los dos meses, mediante las indemnizaciones que quedan establecidas en el art. 5º. Si los caminos hubieran de extenderse ó abrirse fuera de las pertenencias, se sujetarán á las disposiciones generales de la materia.

Art. 57. Los mineros pueden disponer libremente, como de cualquiera otra propiedad, de cuantos derechos se les aseguran por el presente decreto.

Art. 58. Para disponer de los minerales es preciso que el minero haya obtenido el título de propiedad de sus pertenencias. Sin embargo, cuando las minas hubiesen sido demarcadas sin oposicion podrá el Gobernador superior civil conceder autorizacion para la venta del mineral, declarando al interesado sujeto á las disposiciones de los artículos 81, 82, 83 y 84.

Art. 59. Los escoriales y terrenos contenidos en pertenencias de minas son propiedad de los dueños de estas, si antes de su registro no hubiesen sido concedidos ó registrados por otro. Los dueños de las minas, socavones y galerías generales, tienen el aprovechamiento de las aguas halladas en sus labrados, mientras conserven la propiedad de las respectivas posesiones. Mas si voluntaria ó involuntariamente cortasen ó desviasen cualesquiera aguas en curso para abastecimiento de alguna poblacion ó para riego, se repondrán las aguas en su antigua corriente con reparacion de daños y perjuicios, y con responsabilidad civil y en su caso criminal.

Art. 60. Los mineros serán considerados como vecinos de los pueblos en cuyos términos estén situadas sus minas, en cuanto al uso de las aguas, montes, dehesas, pastos y demás aprovechamientos comunes de lo relativo á su industria, sometiéndose á la observacion de las ordenanzas municipales respectivas.

Art. 61. Los registradores de las pertenencias completas ó incompletas, demasías, escoriales y terreros, y los solicitantes de permiso para investigacion, depositarán en poder del Gobernador superior civil el importe de los derechos que en el reglamento se estableciesen para cubrir los gastos oficiales. Tambien satisfarán en su dia los de-

rechos de expedicion de títulos de propiedad.

Art. 62. Todo el que hubiese abierto una calicata y la abandonase está obligado á rellenarla, pudiendo ser compelido por la Autoridad local ó por el dueño del terreno. El registrador ó investigador que desistieren de su empresa lo participarán al Gobernador superior civil con la anticipacion de 15 dias, cerrando sus pozos, bajo una multa que no pasará de 200 escudos. El propietario de minas que quiera retirarse de su laboreo y abandonarlas, cerrará sus pozos y lo pondrá en conocimiento del Gobernador superior civil con la anticipacion de un mes, bajo una multa que no pasará de la expresada cantidad. El Gobernador dispondrá que un Ingeniero reconozca las labores de cuyo desistimiento, ó abandono le haya sido dado conocimiento, para que certifique del estado regular de su fortificacion, y de hallarse suficientemente cerrados los pozos.

Art. 63. Hasta que el registrador, investigador ó dueño de la mina, escorial ó terrero, participen á la Autoridad correspondiente su desistimiento ó abandono, permanecerán sujetos á las prescripciones y cargas del presente decreto.

#### CAPITULO IX.

De la cancelacion de expedientes, caducidad de concesiones y trámites de nueva adjudicacion.

Art. 64. Los expedientes de minas, escoriales y terreros quedarán sin curso y fenecidos:

1º Cuando previo requerimiento se faltase á cualquiera de los requisitos establecidos en el presente decreto para los registradores, á saber: consignar la cantidad que designe el reglamento para cubrir gastos oficiales y satisfacer los de expedicion de títulos de propiedad; acompañar al registro la designacion acudir con el plano del terreno ó con certificacion de haberlo amojonado segun los arts. 21 y 46; habilitar la labor legal; solicitar la demarcacion dentro del plazo señalado; y cuando apremiado al pago del cánón fijo, resultase insolvente. En los expedientes de permiso para investigacion se procederá de un modo análogo, con la diferencia de no ser obligatoria la labor legal, pero sí lo será la peticion de demarcacion en cuanto se descubriere mineral, segun los arts. 1º, 6º, 7º y 30.

2º Cuando alguno de los registradores de pertenencias ó demasías, de terreros ó escoriales, ó solicitante de permiso para investigacion acudiese á la autoridad correspondiente por escrito desistiendo de su propósito. En cualquiera de estos casos declarará el Gobernador superior civil por los trámites de reglamento fenecido ó cancelado el expediente, y franco y registrable el terreno de las pertenencias de minas terreros ó escoriales.

Art. 65. Caduca y se pierde la propiedad de las pertenencias de minas, terreros ó escoriales:

1º Cuando no se cumplen las condiciones de la concesion consignadas en el título de propiedad con arreglo á este decreto y reglamento para su ejecucion.

2º Cuando por mala direccion ó ejecucion amenazan ruina las labores, siempre que requerido el dueño no las fortifique en el término que se le señalase y segun las instrucciones del Ingeniero aprobadas por el Gobernador superior civil.

3º Cuando faltándose al pago del cánón fijo que se señala en el art. 80 y perseguido el deudor por la via de apremio, resultase insolvente.

4º Por abandono, no guardándose las reglas establecidas en los artículos 50, 51, 52 y 53.

Y 5º Por renuncia voluntaria haciéndose dejacion de la pertenencia ó pertenencias en la forma establecida en el art. 62. Los que hubiesen obtenido permiso para investigacion no podrán ser desposeidos sino por alguna de las causas que en este artículo se especifican y con las mismas formalidades, trámites y derecho á recurrir que se expresan en el art. 63.

(Continuará.)

### INTENDENCIA GENERAL

### DE HACIENDA PUBLICA

DE LA ISLA

### DE PUERTO-RICO.

En el expediente sobre distribucion de multas, recargo y valor de los comisos aprehendidos en las Aduanas de la Isla y fuera de ellas:

Vista la Real orden número 343, de 12 de Junio de 1866, resolutive de las dudas consultadas acerca de este punto por el Gobierno Superior Civil de esta Provincia en 22 de Noviembre de 1859, 2 de Marzo y 5 de Agosto de 1861 y 19 de Enero de 1865, mandando que rijan y tengan el mas exacto cumplimiento en la misma las que están vigentes en la de Cuba sobre este mismo asunto:

Vistas las Reales ordenes espresadas, ó sean las de 16 de Enero de 1861, 26 de Diciembre de 1863, 27 de Abril de 1864 y 12 de Junio de 1866 por las cuales se establece de un modo terminante y que no debe prestarse á interpretacion alguna, las reglas á que haya de atenerse la Administracion pública en la liquidacion y distribucion de dichos recargos, multas y comisos y la forma en que ha de recaudarse su importe:

Vistas asimismo las Reales ordenes de 12 de Agosto y 15 de Diciembre de 1858, y la de 5 de Noviembre de 1860 citada con la fecha de 1.º de Marzo de 1860 sin duda por equivocacion, en la de 26 de Diciembre de 1863, relativas á lo mismo:

Visto lo decretado por esta Intendencia en 4 y 17 de Julio de 1866; el informe que en su consecuencia emitió en 10 de Octubre del mismo año la Contaduría Central; y el nuevo acuerdo tomado por la Intendencia en la misma fecha; acuerdo y consulta examinados á interpretar la inteligencia que debiera darse á las espresadas Soberanas resoluciones y á ordenar que por la Administracion Central de Rentas, Aduanas y Loterías se dieran las oportunas disposiciones para el cumplimiento de lo acordado:

Visto lo espuesto en 19 del propio mes de Octubre de 1866 por el Administrador Central Don Juan M. Ortiz, pidiendo la revocacion del acuerdo de la Intendencia y bases propuestas por la Contaduría, fundándose en que eran contrarias á las Reales ordenes de que queda hecho mérito y perjudiciales á sus intereses, segun las demostraciones aritméticas que á continuacion planteaba:

Visto el dato cuenta del mismo Sr. Ortiz fecha 22 de Diciembre del propio año de 1866 en su calidad entonces de Intendente interino, al Excmo. Sr. Gobernador Superior Civil, protestando que como interesado en el asunto solo deseaba su pronta resolucion á fin de poner en actividad lo relativo á la persecucion del contrabando; y el acuerdo que á continuacion estampó dicha autoridad superior, concebido en estos términos:— "Cúmplase á la letra lo que S. M. manda, y dese cuenta al Gobierno para lo que tenga á bien resolver":

Vistas las disposiciones tomadas á consecuencia de dicho acuerdo, á saber:

Una, sin fecha, de aquel Intendente interino mandando á la Administracion Central comunicase y publicase las ordenes relativas á las participaciones concedidas á los denunciadores y aprehensores de contrabando, y el formulario de esta publicacion hecha en 29 del mismo mes de Diciembre:

La comunicacion dirigida por el mismo Intendente interino á la Administracion Central en 3 de Enero próximo pasado previniéndole circulasen la Real orden de 12 de Junio de 1866 á los Corregidores, Alcaldes y Municipios de la Isla, encargándoles la publicacion en las respectivas localidades:

Las nuevas reglas de ejecucion suscritas en 10 del propio mes de Enero por el Administrador Central accidental y el Contador Central, con el V.º B.º del espresado Intendente interino Sr. Ortiz:

El nuevo formulario de la publicacion hecha en 29 del mismo mes de Enero, de las Reales ordenes de 12 de Junio de 1866 y otras, en concepto de ampliacion á la publicacion hecha en la Gaceta oficial núm. 1.º del corriente año:

La circular que además dirigió la Administracion Central á las Administraciones locales en 29 del propio Enero, recordándoles el cumplimiento de aquellas Reales ordenes, ó insertándolas